

La temperatura moral de España

Es ilusa la pretensión de retratar con grado suficiente de objetividad el estado moral de un país. Entre las muchas dificultades con que tropieza una empresa de esta naturaleza, cuatro son, a corto plazo, insalvables: la inexistencia de un elenco suficiente de valores compartidos, lo que hace que para unos españoles sea virtud lo que para otros es vicio; la precariedad e inadecuación de las estadísticas y la carencia de un organismo nacional de referencias éticas colectivas y de sociometría moral.

Aunque la ciudadanía es consciente de estas limitaciones, basta con no taparse los oídos para comprobar en reuniones de todo tipo (congresos, mítines, grupos religiosos, sindicatos, empresarios, asociaciones y hasta en los bares) que el asunto es motivo de preocupación generalizada y que mucha gente habla como si estuviera leyendo en su personal termómetro la fiebre moral de España.

Politeísmo de valores y referencias objetivas

En las sociedades modernas, el pluralismo político suele ir acompañado de un cierto pluralismo moral. En todas existe un núcleo fuerte de valores compartidos pero, fuera de ese núcleo, la dispersión es muy grande. Parece que en España el núcleo de consenso es más reducido que en otros países.

Si tratásemos de establecer un límite superior e inferior, el superior quedaría establecido por los valores expresados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el inferior en los comportamientos que se contemplan en el Código Penal. Sobre el primero, aun admitiendo el conjunto, no parece que estemos de acuerdo a la hora de establecer el orden, la jerarquía moral; sobre el segundo, habría que tener en cuenta que es la expresión del límite de los valores colectivos, al penalizar las conductas que se consideran delitos contra la vida, la propiedad, la libertad sexual, el honor, la libertad ideológica, social, económica y de expresión, etc.

No hay duda de que, además, entre una amplia mayoría de ciudadanos, se valora la honestidad administrativa y se condena la corrupción. Eso sí, la sensibilidad moral de los mismos considera de manera diferente las conductas penales tipificadas y es muy diverso el grado de permisividad respecto a conductas no penalizadas.

Esta gran dispersión complica la tarea de medir la temperatura moral de un país que no alcanza un consenso de valor ni sobre su propia identidad. El primer factor a considerar y el más objetivo, es el grado de conformidad de las conductas con la ley. El cumplimiento por la mayoría de las leyes justas —y en principio todas lo son, salvo que se demuestre lo contrario— es indicio de buena salud moral, porque toda ley justa genera obligaciones morales.

En consecuencia, *a sensu contrario*, la tasa de incumplimiento de las leyes es indicio proporcional de mala salud moral. Puede hacerse una aproximación honesta al tema, tomando como referencia los informes anuales de la Fiscalía del Estado y diversas estadísticas de otras fuentes. Desgraciadamente, en unos y otras sólo se mide el número de infracciones denunciadas, no la aprobación o reprobación que cada una de ellas merece a los ciudadanos, que sería el verdadero indicador de la salud moral del país.

El infractor marca la línea más baja del termómetro moral, pero es estadísticamente minoritario. A efectos de obtener conclusiones significativas, es más importante medir las reacciones de los no trasgresores ante los delitos más habituales: rechazo, indiferencia, condescendencia, resignación o aplauso.

Las estadísticas bajo sospecha

No disponemos de unas estadísticas orientadas a la medición del estado moral de cada generación en un momento dado ni de series cronológicas comparables. Pero es que, además, las disponibles sobre criminalidad y delitos (factores importantes, aunque no únicos, para medir la temperatura moral) están bajo sospecha de, al menos, heterogeneidad de criterios u orientación interesada en su elaboración y, a menudo, manipulación partidaria en la interpretación.

Las tres fuentes estadísticas oficiales (FCSE, CGPJ y FGE) discrepan de modo importante: las diferencias entre los datos sobre delincuencia suministrados por las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y por la FGE (Fiscalía General del Estado) no coinciden en algo aparentemente tan sencillo como en el número de delitos denunciados. Tomando como referencia principal los datos de los informes anuales de la FGE desde 1993, en general, los informes de la Fiscalía parecen estar orientados a transmitir tranquilidad y confianza en el gobierno. Casi siempre resaltan el descenso de la criminalidad y la menor tasa de ella en relación con otros países del entorno.

Esta politización de los instrumentos estadísticos, común a todos los colores que han gobernado en España, significa en sí misma una señal de mala salud moral.

Lo que ocultan los titulares

Que los titulares de prensa y telediarios están orientados, no es un secreto para nadie. Un ejemplo, un medio resumió así el informe de la FGE: *la criminalidad en España disminuye, aunque aumenten algunos delitos. Así, en 2004, según la FGE, la criminalidad descendió en un 0.5%, pero aumentaron en un 10,7% los delitos sexuales.*

Por otra parte, debemos prevenir contra la lectura de titulares tendenciosos y contra la percepción propia orientada por prejuicios. Denunciamos en ese sentido un titular repetido: *El 22% de los presos son inmigrantes.* No se dice a continuación que la mayoría de ellos están en la cárcel por falsedad en documento, delito en muchas ocasiones explicable en quienes necesitan los papeles como nosotros la comida.

A pesar de las reservas, las estadísticas son elocuentes

Aunque debamos tener en cuenta las sospechas apuntadas y los efectos estadísticos de la reforma del Código penal (incremento de las denuncias por faltas), algunos datos, como los siguientes, son verdaderas señales de **alarma social y moral**:

La población reclusa ha crecido el 31,6% en los últimos cinco años, pasando de 39.169 a 51.339. Sólo en el año 2005, el incremento fue del 8,5%. Este dato no es en sí mismo significativo, puesto que, durante estos mismos años, el incremento de la población española ha sido de más de cuatro millones. Por eso, tomamos como referencia los llamados **índices de criminalidad**, que es una magnitud relativa: **número de delitos y faltas por cada diez mil habitantes**. Estos índices revelan una evolución creciente durante el decenio 1993-2003, con un ligero descenso en 2000 y 2001, según la secuencia de datos proporcionados por el *Instituto universitario de investigación sobre seguridad interior*. La evolución posterior es también creciente.

Según el último informe de la FGE, en 2004 crecieron los índices de delitos contra la libertad sexual, contra la libertad de las personas, contra el patrimonio, contra la propiedad intelectual, contra Hacienda y la Seguridad social (casi el 40%), contra el patrimonio histórico, contra la seguridad en el tráfico, contra el medio ambiente y contra la Administración de Justicia (nada menos que el 69%).

Diversos informes policiales y algunas encuestas públicas y privadas aportan datos preocupantes referidos a 2005: El número de detenidos por tráfico y consumo de drogas ha crecido en 16.400 personas. Uno de cada cuatro jóvenes menor de 18 años (según otras fuentes, uno de cada tres) se ha iniciado ya a esa edad en el consumo de estupefacientes. Sesenta y tres mujeres fueron asesinadas por sus compañeros sentimentales; la cifra, de mantenerse la media de los tres primeros meses, se superará en 2006; ni el observatorio de la violencia de género ni la nueva legislación han detenido el avance de esta lacra moral.

Por mucho que estos datos puedan significar también un crecimiento moral de la sociedad que le hace denunciar más conductas delictivas cada vez, su primera y directa lectura refleja un estado moral muy deficiente.

Por otra parte, el número de abortos registrados, realizados dentro de los tres supuestos despenalizados, superó la cifra de 84.000, con un porcentaje muy elevado de mujeres jóvenes y de «repetidoras» (una de cada cuatro). Cada siete minutos se produce un aborto provocado en España. La magnitud de esta cifra, además de su propio drama, revela también las carencias morales de una sociedad que no es capaz de ofrecer comprensión y ayuda a muchas mujeres que, de tenerla, es dudoso que abortarían.

Baja temperatura moral estructural

Muchas veces hemos alabado la solidaridad espontánea que suele darse entre los pueblos poco desarrollados. En las sociedades desarrolladas, sería indigno apelar antes a la virtud individual que a la virtud estructural. La desatención de necesidades básicas de los ciudadanos, la exclusión de una parte de ellos y la práctica marginación de otra son siempre indicadores de baja temperatura moral. En España existen recursos suficientes y las diferentes administraciones han afinado los mecanismos de recaudación. Sin embargo, no siempre redistribuyen lo recaudado con criterios de equidad. El que muchos españoles, y más los inmigrantes, encuentren invencibles dificultades para acceder a una vivienda digna, al trabajo, a la educación, a la cultura, a una pensión de jubilación digna... es un indicio, difícil de cuantificar pero muy real, de que la salud moral del país es manifiestamente mejorable.

Bajo perfil moral comunitario

Hay muchos indicios de que el perfil moral actual de la comunidad es mediocre. Veamos una serie de ejemplos.

Los estudios de la Fundación Santa María, o de los sociólogos como **Javier Elzo** («Sociología de los valores»), ponen de manifiesto que la mayoría de los españoles es cómoda y hedonista, altruista en los sentimientos, pero poco comprometida en actuaciones concretas. Los problemas de las drogas, la violencia, el acoso y las diferentes manifestaciones del *descompromiso* social son conocidas y, en cierto modo, medidas.

Una encuesta entre los estudiantes de primero de facultad de la Universidad Complutense puso de relieve que, para el 94%, el principal motivo para elegir carrera fue ganar dinero. A una repregunta sobre por qué es importante el dinero, un porcentaje similar respondió: «porque permite vivir cómodamente». Los jóvenes son herederos aventajados del hedonismo de la generación de sus padres.

El porcentaje de jóvenes menores de 30 años que está afiliado a algún partido, sindicato, movimiento o asociación no llega al 4%. El porcentaje de afiliación de adultos es aún inferior.

La mayor parte de los españoles rehuye manifestar su opinión y su conducta. Prefiere no verse en problemas. Pasa al lado de un necesitado o accidentado sin detenerse; no se denuncia una irregularidad; mira hacia otro lado cuando alguien es víctima de violencia injusta, etc.

Mientras ocurre esto, la cuota de pantalla de los programas de telebasura, en los que por principio se viola la privacidad y se trivializan todos los valores, alcanza una media del 21% y ha impulsado a prácticamente todas las cadenas a una desenfadada carrera por conquistar o fidelizar esos millones diarios de espectadores, con los consiguientes beneficios publicitarios. La sociedad que se amodorra con estos programas va perdiendo los resortes morales para distinguir el bien del mal.

Algunos medios de comunicación manifiestan un perfil moralmente bajo por excesivo y ofensivo. En ellos, la divergencia política lleva a algunos comunicadores a perder el sentido de la medida y el respeto a la persona. Dado el poder de los medios, también estas formas son mimetizadas por los oyentes que repiten los mismos exabruptos de «su» comunicador e incluso los amplifican.

Muchos manifiestan unas tragaderas morales para los delitos fiscales y societarios que resultan alarmantes. La mayor parte ni los considera una perversión moral y es frecuente oír que «sólo hay que pagar si se descubre el delito». El dinero negro sigue embolsado esperando la ocasión de aflorar sin riesgo.

Los episodios de nepotismo político, de aplicación de fondos a fines partidarios, de subvenciones y adjudicaciones de obras a los amigos, incluso de «mordidas» en las contrataciones, no son escasos. Algunos llegan a descubrirse y todos lanzamos nuestros dardos contra los corruptos y

defraudadores. Pero se tarda años en descubrir una trama o no se la descubre nunca. Ello demuestra que la estructura de la sociedad y de la Administración no ha sido capaz de generar mecanismos de autocorrección o sanción automática, lo cual es signo de baja temperatura moral. Mucho se añora la existencia de un Instituto de observación e intervención ética, en el que podrían coordinarse y cobrar mayor altura moral las funciones de los diferentes observatorios existentes o por existir (de la violencia de género, de las irregularidades administrativas, de la corrupción).

La esperanza en las minorías más comprometidas

De las líneas anteriores se podría inferir una imagen excesivamente pesimista de la situación moral de España. Sin embargo, no participamos de esta opinión.

En primer lugar, porque cualquier tiempo pasado no fue mejor. Los males que denunciarnos en este comentario editorial existieron siempre, unos en menor y otros en mayor proporción. En otros tiempos, a la desventura de su existencia había que añadir la hipocresía de su ocultación. Hoy la sociedad ha desarrollado mecanismos para ser más diáfana y más autocrítica. Cualidades necesarias para su mejora.

No cabe duda que la baja temperatura moral, por el mismo principio físico de *homeotermia*, rebajará la temperatura moral superior de todos los contiguos en el espacio y en el tiempo, a menos que surjan poderosos focos radiantes de más calor moral.

Y algunos de estos focos están surgiendo ya. Unos 200.000 jóvenes universitarios españoles son miembros activos de alguna ONG y más de 500.000 cooperan activamente en parroquias y en organizaciones de voluntariado social. Si estos jóvenes, porcentualmente representan sólo el 8% de su franja de edad, aportan una mirada esperanzadora hacia el futuro porque son como el **pequeño resto de Israel**, que en Babilonia mantuvo íntegra la esperanza mesiánica, sostuvo a los débiles y comunicó seguridad a los vacilantes. ■